

nivel mundial en salud mental. Por lo mismo, que a este escenario se sume ahora un caso de este calibre no resulta sorprendente, sino que constituye otra falta, esta vez aún más clara, de cómo este gobierno ha ido dejando de lado a las personas para beneficiarse a sí mismo y a su círculo más cercano.

Antes de ser electo, el actual gobierno sostenía que atenderse en el sistema privado era un privilegio reservado para quienes podían pagarlo. Sin embargo, a la luz de estos hechos, parece que el verdadero privilegio hoy es recibir atención oportuna y de calidad en el sistema público, algo a lo que solo algunos pueden acceder, aunque esto pueda costarle la vida a otra persona.

Cristóbal Laimböck M.

Educación superior

● Durante años, el debate sobre educación superior en Chile se ha concentrado casi exclusivamente en el acceso financiero: aranceles, endeudamiento y más recientemente, gratuidad. Sin embargo, dejó en segundo plano una dimensión clave de la experiencia universitaria: el costo de vida cotidiano de los estudiantes. Esa omisión ya no es sostenible, ya que el costo de vivir

mientras se estudia se ha convertido en un factor estructural que incide directamente en la deserción, el rendimiento académico y la calidad real de la experiencia formativa.

La gratuidad redujo los costos de matrícula para los estudiantes más vulnerables, pero persisten altos gastos en arriendo en ciudades universitarias, transporte, una beca de alimentación insuficiente y costos de conectividad que hoy son indispensables.

Los costos no arancelarios inciden directamente en la permanencia estudiantil. Cuando el presupuesto no alcanza, se reduce la carga académica, se precariza la vida cotidiana o se deserta. El impacto no es solo económico, afecta rendimiento, salud mental y profundiza desigualdades que la gratuidad no corrige.

La política pública asumió que financiar el arancel garantizaba equidad, pero dos estudiantes con gratuidad viven realidades distintas según territorio y recursos. La equidad formal de acceso no asegura trayectorias equivalentes y el contexto socioeconómico sigue marcando diferencias.

Si Chile quiere que la promesa de la educación superior se traduzca en trayectorias completas y no en expectativas frustradas, debe mirar más allá del arancel. Avanzar hacia una mirada integral implica asumir que el costo de

vida no es asistencialismo, sino una condición esencial para la retención, la calidad y la justicia educativa y exige fortalecer apoyos y coordinación para prevenir el abandono.

Nassib Segovia

Retrasos en pagos

● El incumplimiento en los plazos de pago de la gratuidad no es un problema administrativo menor. Afecta la operación cotidiana de las universidades, el pago oportuno de sueldos y debilita la confianza en el sistema de financiamiento, especialmente en el momento más sensible del año académico. Resulta difícil impulsar reformas estructurales como el Financiamiento para la Educación Superior (FES) si los mecanismos vigentes ya presentan fallas de ejecución. No es posible exigir planificación, calidad y estabilidad a las instituciones cuando el propio Estado no entrega certezas básicas.

Hernán Muñoz

El fin de la fila única

● El concepto de salud pública en